

## Santa Magdalena pide la ampliación urgente del colegio y atención médica todos los días

SANTA MAGDALENA  
EL 7 SET

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, visitó la localidad de Santa Magdalena de Pulpis, donde se entrevistó con el alcalde, Sergio Bou. Durante el recorrido efectuado por distintos lugares del término municipal, el primer edil transmitió a Lorenzo la necesidad de que el Ministerio de Fomento complete el vial de servicio que conecta la rotonda de acceso a Peñíscola con Santa Magdalena. El subdelegado se comprometió a transmitir esta petición a la Jefatura Provincial de Carreteras.

Bou puso en conocimiento del subdelegado otros problemas que atañen a la población, y cuya resolución es competencia de otras instituciones como la Generalitat o la Diputación. En este sentido, denunció "la nefasta situación en la que se encuentra el Colegio Público Albert Selma", cuya dirección se ha visto obligada este curso a habilitar como aula el almacén de material de educación física. Bou explicó que se necesita urgentemente un aula nueva para P-5, otra para primero de Primaria, así como un aula de música y un gimnasio cubierto para los días de invierno en los que haga mal tiempo. El alcalde se comprometió "a ceder los terrenos que sean necesarios".

Dado el alto grado de asociacionismo que existe en Santa Magdalena, Sergio Bou explicó igualmente que su población, que cuenta en estos momentos



con 835 habitantes, necesita disponer de un edificio social, en el que se pueda habilitar una sede para cada una de las 10 asociaciones existentes, además de biblioteca, ludoteca, sala de exposiciones y conferencias, archivo y almacén. Según ha dicho "Santa Magdalena necesita que tanto la Generalitat como la Diputación apoyen este proyecto porque las personas que han optado por quedarse a vivir en el pueblo merecen tener cubiertas sus necesidades sociales y culturales".

Por otra parte, Bou denunció la "deficiente atención sanitaria" que presta la Conselleria de Sanitat en la población. En este sentido, ha dicho que "exigimos

poder tener médico todos los días del año. En la actualidad, cuando el médico hace una guardia, al día siguiente o no presta servicio, o lo hace únicamente durante unas horas, lo que genera desconcierto y sensación de abandono entre los habitantes de este pueblo. Además, por el aumento de población, necesitamos una urgente ampliación del horario de atención del pediatra". El alcalde de Santa Magdalena explicó por último que Santa Magdalena también necesita que la Generalitat "amplíe, mejore y señalice correctamente el vial que conecta la población con Salzedella".

## La Inspección de Trabajo sancionó a 10 empresas portuguesas subcontratadas en las obras de la cárcel de Albocasser

La sanción propuesta por la Inspección para estas empresas alcanza los 135.895 euros

ALBOCASSER  
EL 7 SET

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, hizo público que la Inspección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha incoado 43 actas de infracción referidas a la comisión de 59 infracciones, a diez empresas subcontratadas en las obras de construcción del centro penitenciario Castellón II, con una propuesta de sanción económica total de 135.895 euros. En opinión de Lorenzo, "este tipo de actuaciones ponen de relieve que el Gobierno de España practica la tolerancia cero con todos aquellos que no respetan las normas que marca la legislación laboral, que no respetan los derechos de los trabajadores, o ponen en peligro la integridad de éstos".

Estas propuestas de sanción surgen del control que se ha realizado a las 50 empresas, que con un total de 879 trabajadores, han estado prestando servicio en las obras de construcción del nuevo centro penitenciario de Albocàsser. La acción fue llevada a cabo de forma conjunta por un equipo de la Inspección Provincial de Trabajo y por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. De las 50 empresas examinadas, 40, todas ellas españolas, tenían la documentación en regla. Sin embargo, las actas con las propuestas de sanción se incoaron a 10 empresas transnacionales (subcontratas portuguesas), entre las que se detectaron 4 infracciones muy graves, 14 graves, y 44 leves, que afectaban a un total de 284 trabajadores. Se consideran acciones muy graves que las empresas portuguesas no comuniquen a la autoridad laboral o que lo hicieran fuera de plazo, la llegada de ciudadanos de nacionalidad portuguesa para trabajar en las obras de la

prisión; o que las empresas inspeccionadas carezcan de capacidad reconocida para trabajar en España.

Por otra parte, a cinco de las empresas inspeccionadas se les ha exigido el

ingreso de cuotas a la Seguridad Social por deudas presentadas y no ingresadas. Por esta actuación de la inspección la Tesorería General de la Seguridad Social ha ingresado 142.351,01 euros.

### Lorenzo niega que vayan a haber muchos traslados de presos de Albocasser a Castelló

Dentro del enfrentamiento que mantiene la Generalitat con el Gobierno Central a cuenta de la gestión de la cárcel de Albocasser, el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, lamentaba el pasado 18 de octubre la "demagogia constante e intoxicación a la opinión pública" que están poniendo en práctica el consejero de Justicia, Fernando de Rosa y el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, cada vez que se refieren a los traslados de presos que generará el Centro Penitenciario Castellón II. Lorenzo pidió al conseller y al alcalde de Castellón que "se informen, o que dejen de mentir", porque en Albocàsser habrá 1.500 presos, todos ellos penados. Según explicó, "este dato es importante, porque los internos que normalmente tienen que salir a los juzgados son aquellos que no tienen condena en firme y se encuentran en situación de prisión preventiva". Lorenzo añadió que extrapolando los datos que se registran en otras prisiones españolas de similares características, "de Castellón II se producirán entre 5 y 7 salidas judiciales diarias, que no necesariamente tendrán como destino los juzgados de Castellón, ya que la diligencias las abre un juzgado del lugar en el que se haya cometido el delito".

El subdelegado añadió que en una cárcel con internos penados, "la mayoría de las diligencias que se realizan son notificaciones, ratificaciones de abogado u otras diligencias que no precisan de la presencia del recluso, y que se podrían resolver mediante videoconferencia - Castellón II cuenta con esta tecnología - o asignando un

agente judicial al juez de paz de Albocàsser para que efectúe todas esas notificaciones, tal como ocurre por ejemplo en el municipio zaragozano de Zuera, donde existe una prisión con capacidad para 2.000 presos". Lorenzo lamentó que la Generalitat Valenciana "se dedique a polemizar con asuntos en los que no tiene competencia, mientras muestra una incapacidad supina para solucionar aquellos problemas que sí le competen". En este sentido reprochó la falta de medios humanos y materiales que tienen la mayoría de los juzgados de la provincia, o que "hoy nos hayamos desayunado con la noticia de que los consellers de Infraestructuras y Justicia no sacarán a licitación el proyecto de construcción del nuevo palacio de Justicia de Vila-real hasta el verano de 2008, en vez de en 2007, como anteriormente había prometido la propia Generalitat".

Por otra parte, el subdelegado explicó que "la mayor parte de los traslados que se van a realizar desde Albocàsser estarán relacionados con las salidas de presos para pasar consulta de especialidades". En este sentido, Lorenzo asegura que la solución pasa por la firma de un convenio entre la conselleria de Sanitat y el Ministerio del Interior, similar al que se firmó entre ambos hace año y medio para la cárcel valenciana de Picassent. En virtud del mismo "las consultas de especialidades se realizan en la propia cárcel, a la que asiste periódicamente un grupo de médicos para pasar consulta". Lorenzo espera que "pronto" se pueda rubricar el convenio para Castellón II.

EL 7 SET ENGLISH - by Brenda Cundell

The matter referred to the dispute put forward by a resident, whose objections to the re-allocation had not been taken into consideration, and who now had been proven to be right in the courts. The Town Planning councillor accused the previous governing team of not having applied the tribunal's ruling and of having ignored the six expert reports which advised against the granting of licences in this Sector until the land was re-distributed in accordance with the judicial ruling. However, Tosar maintains that the executive chaired by Isabel Soriano took no notice of the reports which advised against the granting of licences, "now the resident has won the dispute, as there is no plot of land it must be given development

potential", so that the new government sees itself forced to "put the irresponsibility and mess right". The mayor again closed the accusations, indicating that the resident's case had been resolved in his favour in June 2005, prior to the concession of the licences, which took place at the beginning of 2006. Juan indicated that they are trying to find a solution through negotiations with this resident, in order not to have to compensate him for the demolition of the buildings for which the licences were granted by the previous government which "would bankrupt Alcala Council", to which he added that the irresponsibility of the previous executive "reaches undreamed of extremes".

The matter referred to the dispute put forward by a resident, whose objections to the re-allocation had not been taken into consideration, and who now had been proven to be right in the courts. The Town Planning councillor accused the previous governing team of not having applied the tribunal's ruling and of having ignored the six expert reports which advised against the granting of licences in this Sector until the land was re-distributed in accordance with the judicial ruling. However, Tosar maintains that the executive chaired by Isabel Soriano took no notice of the reports which advised against the granting of licences, "now the resident has won the dispute, as there is no plot of land it must be given development

potential", so that the new government sees itself forced to "put the irresponsibility and mess right". The mayor again closed the accusations, indicating that the resident's case had been resolved in his favour in June 2005, prior to the concession of the licences, which took place at the beginning of 2006. Juan indicated that they are trying to find a solution through negotiations with this resident, in order not to have to compensate him for the demolition of the buildings for which the licences were granted by the previous government which "would bankrupt Alcala Council", to which he added that the irresponsibility of the previous executive "reaches undreamed of extremes".

### Increase in taxes to put cash into Alcala

Alcala de Xivert governing team will make money by increasing various taxes, or at least this justification was discussed in the council meeting held on 8th November. The meagre municipal funds are not in their best state at the end of the present financial year and the executive chaired by Francisco Juan discussed this fully through the words of the financial spokesperson and Treasury councillor, Cristina Pinilla. The Council threw out their own resources and soaked up what they can by raising a series of taxes, such as that for Constructions, Installations and Works (ICIO), the tax on the increase in value of land of an urban nature and the taxes for the collection services for large waste articles and their treatment and disposal.

Pinilla has turned the Council's pockets inside out to check that "we find ourselves in a poor financial situation"... "there is not sufficient money". The department head made bobbin lace to prepare a budget, which as she assured us was seriously compromised by the previous governing team's expenditure during the last legislature, which according to what emerged from the words of the methodical Treasury councillor, did not even leave water in the vases in the council offices.

It is precisely this poor financial situation which has made the local executive renounce the 2006 POYS, the evacuation of water in La Foia,

in order to avoid having to face that part of the cost of the work which would correspond to the Council, which was recognised by the governing team when questioned by the socialist spokesperson, Lola Prats.

There is no money for much joy in Alcala either, as Pinilla stated that they had had to supplement the amount for fiestas to cover the Christmas celebrations, as the budgeted allocation had all been used. Cristina Pinilla, a recent arrival in the political arena, has become a real bastion in Francisco Juan's executive. From the Treasury department, the novice is at the centre of the PP government and is already showing signs of a strong personality with a clear tendency to control the situation. This has led her to correct the mayor himself and she was also been told off in the council meeting held on 8th November during a discussion with Lola Prats, when the mayor reminded her that it is he who chairs the meetings. Finally, the spirit of the increases is that generally they should not affect poorer pockets and that this increase in fiscal pressure will bring in funds to approach a future full of projects which had to be funded somehow, as well as payment for the not insubstantial number of considerably delayed invoices which have accumulated. There is the horrifying fact that the refuse collection and street cleaning company is owed 250,000 euros.

### Alcala's PP restarts town-planning approvals with two PAI's

Due to the moratorium there have been no new approvals for five years

It took the return of Francisco Juan Mars to the mayor's office at the head of the PP to end the five years and three months since any PAI's were approved in Alcossebre. The moratorium started during the same council meeting when the PP rejected three PAI's, Sectors 12 and 13, put forward by Porta Mediterránea, and Sector 15, put forward by Gestimed. Now, at the full council meeting held on 8th November, the

new executive elected following the 2007 elections has approved two PAI's on detailed land, P-5, awarded to the Porta Mediterránea company, and P-7, awarded to Rosales XX. During the meeting, town planning councillor, Javier Tosar, clearly declared the lines the local executive's town planning policy will follow.

To be continued P 20